

España no va bien. Cualquiera que sea el indicador económico que se analice, la situación actual de la economía como sostén del bienestar de los españoles es poco saludable. España necesita un anclaje estratégico y la suficiente persuasión política para convencernos como sociedad de la necesidad crítica de reordenar nuestras prioridades.



Descapitalización estratégica

En el momento de escribir estas líneas, la inflación interanual ha registrado un récord del 10,2%, no visto desde mitad de los años ochenta del pasado siglo. Las previsiones de crecimiento del PIB para este año continúan su caída, avaladas por el pobre resultado del primer trimestre (0,2%) y por un otoño futuro que incluso los más optimistas auguran malo en términos económicos con posibilidad de que algunas economías europeas, nuestros principales clientes, entren en recesión. Recordemos que seguimos siendo el único país de la zona euro que no ha recuperado el nivel de renta del año 2019 antes de la crisis provocada por el COVID-19 (Gráfico 1). El buen comportamiento de los ingresos públi-

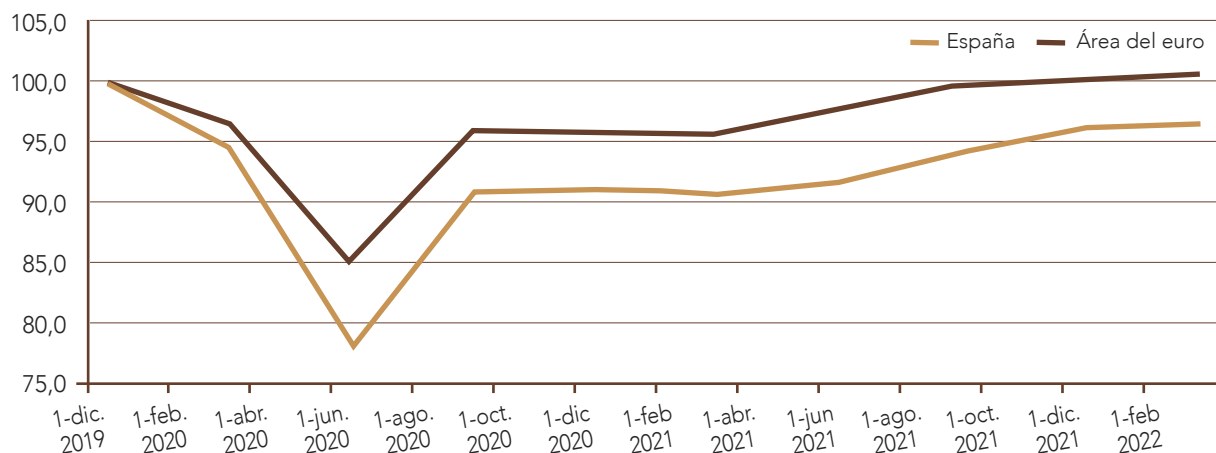
cos, como consecuencia de la activación de la economía tras la pandemia y de la propia inflación, no logra esconder un déficit estructural que ronda el 4%, que antes de la pandemia ya era el más alto de la eurozona y que, según las últimas proyecciones de la Comisión Europea, irá a peor. Dicho de otro modo, todos los años nos gastamos unos 50.000 millones de euros más de lo que somos capaces de generar, alimentando un stock de deuda pública que, si bien hasta ahora se ha beneficiado de unos tipos de interés artificialmente bajos, de ahora en adelante, con el cambio de signo de la política monetaria, pesará de forma creciente en los presupuestos generales

MIGUEL MARÍN

Economista y consultor.
Socio director de Análisis
Económico Integral.
Profesor de Teoría
Económica
del CEU - San Pablo

GRÁFICO 1.

Evolución del PIB en España y en la UEM



Fuente: Banco de España

del Estado (Gráfico 2). Lo anterior no ayudará a crear empleo, más bien todo lo contrario, aunque la temporada turística, que se espera plenamente normalizada, nos proporcionará un cierto alivio estadístico que, por desgracia, no se sostendrá después del verano.

Que España no va bien no es una opinión, es un hecho. Ciertamente es que se podrían interponer atenuantes. El siglo XXI se está mostrando ciertamente convulso desde sus inicios. La

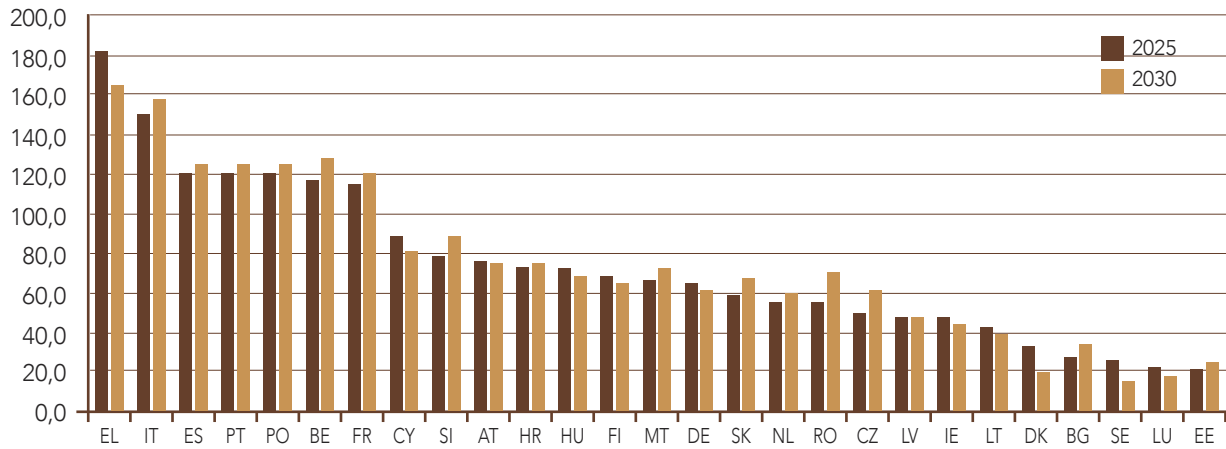
Gran Recesión de 2008, la pandemia y ahora la guerra de Ucrania nos han mantenido en una situación de provisionalidad obligada y permanente, compartida con nuestros socios, pero siempre más dañina para la economía española que para el resto. Quizás las preguntas adecuadas, a la vista del contexto adverso, serían: ¿por qué vamos comparativamente tan mal?, ¿por qué sistemáticamente nos afectan las crisis más que a los demás? Y, sin duda, lo más preocupante, ¿por qué las expectativas sobre la economía española en los ámbitos económicos más especializados están ancladas? O, dicho de otra forma, ¿por qué existe la percepción, si no la convicción, de que España no hace lo necesario para mejorar?

La respuesta a estas preguntas se concentra en lo que podríamos llamar “descapitalización estratégica”. Un proceso en el que, como país, estamos inmersos desde que se agotó el impulso reformista de finales del siglo XX, caracterizado por una orientación política exclusiva hacia el dividendo electoral en el corto plazo, incluso

Estamos en un proceso de “descapitalización estratégica” desde que se agotó el impulso reformista de finales del XX. La orientación política se dirige en exclusiva hacia el dividendo electoral a corto plazo abandonando cualquier pretensión de mejora de la economía a largo plazo

GRÁFICO 2.

Escenarios de deuda pública 2025-2030 en la UE



Fuente: Comisión Europea

en los períodos de bonanza económica, abandonando cualquier pretensión de mejora a largo plazo de la economía que pudiera alterar las expectativas sobre nuestro futuro. Quizás a alguien le pueda parecer exagerado el diagnóstico. No en vano, hemos tenido períodos reformistas como el que siguió al colapso financiero de 2012 o la tan cacareada “España 2020-2030”, que presentó con todo bombo el actual Gobierno a la búsqueda de ser, antes que nadie, el país más verde de nuestro entorno. Del primero, que implicó tres grandes reformas, la laboral, la financiera y la de pensiones, solo nos queda una viva. La reforma obligada del exótico sistema financiero español fue más una liquidación que otra cosa y con no demasiada astucia política, puesto que la factura para los españoles supera ya de largo los 60.000 millones de euros. Las otras dos, la del mercado de trabajo y la de las pensiones, han sucumbido a la voracidad derogatoria de nuestra alternancia democrática, a pesar de ser dos reformas unánimemente aplaudidas en el exterior como muestra de lo que deberían hacer el resto de los

países europeos. Respecto a la estrategia con horizonte 2030, corremos el riesgo de que se quede en un pin multicolor. Es lo que ocurre con cualquier estrategia que solo está basada en los objetivos y no en los medios para conseguirla, cuando no se es claro con los verdaderos costes del cambio. A las primeras dificultades –y no solo por la guerra en Ucrania, puesto que estas se habían manifestado desde mediados del año 2021– se puso de manifiesto que no existía tal estrategia y que, de nuevo, la improvisación y la sobreacción ante los acontecimientos sobrevenidos son el pírrico soporte que nos ha de llevar hacia la descarbonización de la economía.

No obstante, el desanclaje estratégico de España tiene raíces mucho más profundas y se

Desde 2013, año en el que se empezó a recuperar el PIB tras la Gran Recesión de 2008, España ha protagonizado la mayor caída de productividad de la eurozona con un 10,6%, según los datos del INE

manifiesta en datos económicos y en comportamientos políticos que nos alejan del legítimo ideal de una nación con ambición suficiente para superar los innumerables y exigentes retos que nos plantea el siglo XXI. Parafraseando a Mario Vargas Llosa, en el siglo XXI, todos los países saben lo que tienen que hacer para tener éxito. Pues la sensación generalizada es que, o España no lo sabe o no quiere darse por aludida. A los hechos me remito.

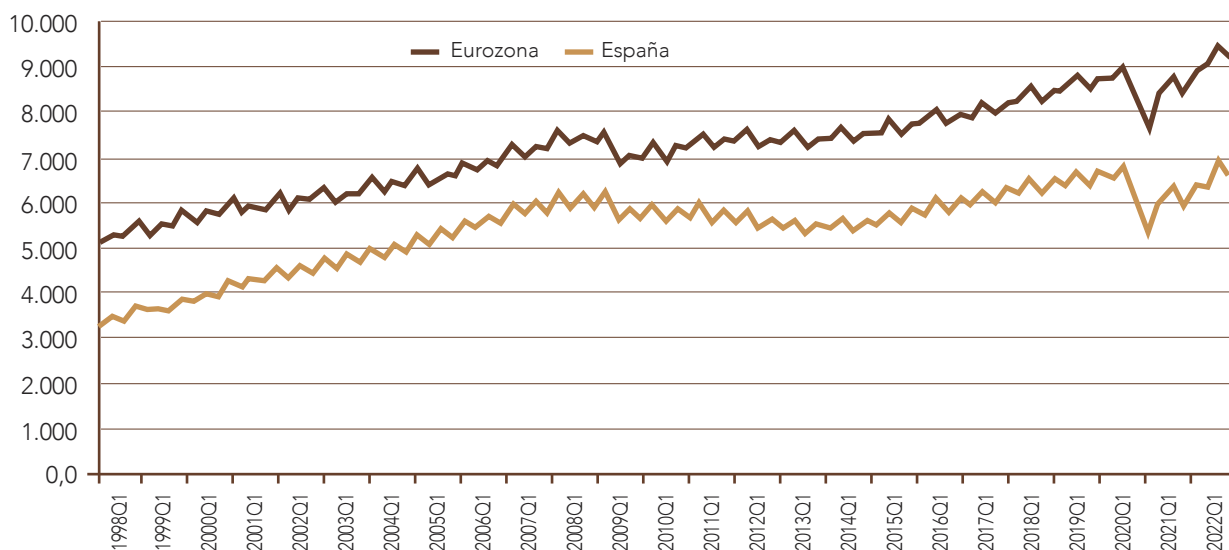
Quizás la rúbrica más flagrante de esta despreocupación por el futuro sea la que tiene que ver con nuestro crecimiento potencial o de largo plazo. Nos pasamos los días analizando si creceremos dos décimas más o menos en un año concreto y hemos desatendido la obligación política de ensanchar y modernizar las capacidades de la economía mediante la reforma del modelo productivo. Se ha abandonado el loable

La reciente reforma laboral del Gobierno ha consagrado la idea de que la temporalidad en España es un problema estadístico y no real. El Gobierno ha sucumbido a la tentación de reducir la temporalidad cambiando el nombre del contrato temporal

objetivo político de la convergencia real con nuestros socios europeos (Gráfico 3) y con las naciones más ricas del mundo, que durante los últimos años del siglo pasado guiaba las decisiones en materia de política económica y representaba un objetivo cuantificable y medible con el que los españoles podían evaluarlas. Desde el año 2000, la productividad total de los factores ha caído un 14,7% (Gráfico 4), lo que ayuda a explicar que el PIB per cápita de España sea un

GRÁFICO 3.

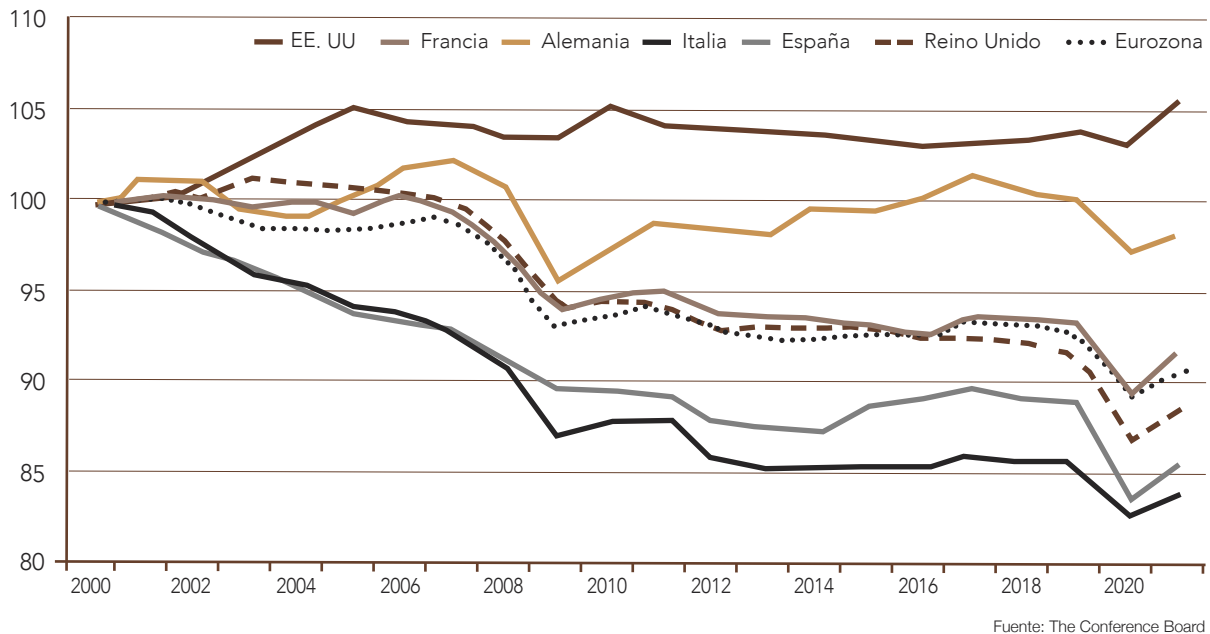
Evolución del PIB trimestral per cápita de la eurozona y España (precios corrientes, 1998-2021)



Fuente: Eurostat

GRÁFICO 4.

Evolución de la productividad total de los factores (PTF)
(Base 100 en 2000)



18,5% inferior al de la eurozona, siendo también más baja la productividad por hora trabajada (un 14,1% inferior). Detrás de estos resultados se encuentra el escaso esfuerzo inversor en los elementos determinantes de la productividad: España se sitúa por debajo de la media europea en variables como el *stock* de capital tecnológico respecto al PIB (un 66,1% inferior), capital humano (un 4,2% inferior), *stock* de capital público (un 26,6% inferior ajustado por población) y el *stock* de capital productivo por empleado, un 29,9% inferior (“Productivi-

Los españoles nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades, a gastar mucho más de lo que somos capaces de generar y a incumplir sistemáticamente nuestros compromisos de estabilidad presupuestaria

dad y reformas estructurales, esa es la cuestión”, Joaquín Maudos, FUNCAS, 2021).

Desde 2013, año en el que se empezó a recuperar el PIB tras la Gran Recesión de 2008, España ha protagonizado la mayor caída de productividad de la eurozona, con un 10,6%, según los datos del INE. Es decir, seguimos manteniendo un modelo productivo que basa su crecimiento en la mera acumulación de factores de producción –cada vez más escasos por la evolución demográfica–, que vive a merced de los ciclos económicos –cada vez más cortos y cada vez más violentos– y que se muestra crecientemente alejado de los estándares de mejora que muestran nuestros pares europeos. Esto no siempre ha sido así. Con sus luces y sus sombras, en los últimos 50 años del siglo XX, España protagonizó, junto con países como

Japón, la historia de éxito más significativa en términos de reducción de la brecha de PIB per cápita con Estados Unidos. Sin embargo, desde comienzos del siglo actual, hemos perdido esta senda y lo más preocupante es que a nadie parece importarle. Las capacidades de producción a futuro de la economía española no están en la agenda política y, si lo están, o lo han estado, los datos nos dicen que se está fracasando en el intento.

Tenemos, pues, un modelo productivo anclado en el pasado, con escasa aportación de valor si nos comparamos con el resto de los países desarrollados. La pregunta ahora es saber si podríamos tener otro o si debemos conformarnos con lo que hay, lo que nos lleva a plantearnos cuestiones clave de la política económica, como la gestión del mercado de trabajo, la sostenibilidad a largo plazo del propio modelo de bienestar con el que contamos en la actualidad o la capacidad de atraer inversiones sobre las que basar la reforma del modelo. Cuestiones, todas ellas, sobre las que reposa en buena medida la formación de expectativas a futuro de la economía española.

Respecto al mercado de trabajo, el diagnóstico es de sobra conocido. El mercado laboral español se equilibra a niveles de empleo muy bajos generando tasas de desempleo que son sistemáticamente mayores que las de cualquier otro país de la UE-27 (Gráfico 5). Además, también son caracte-

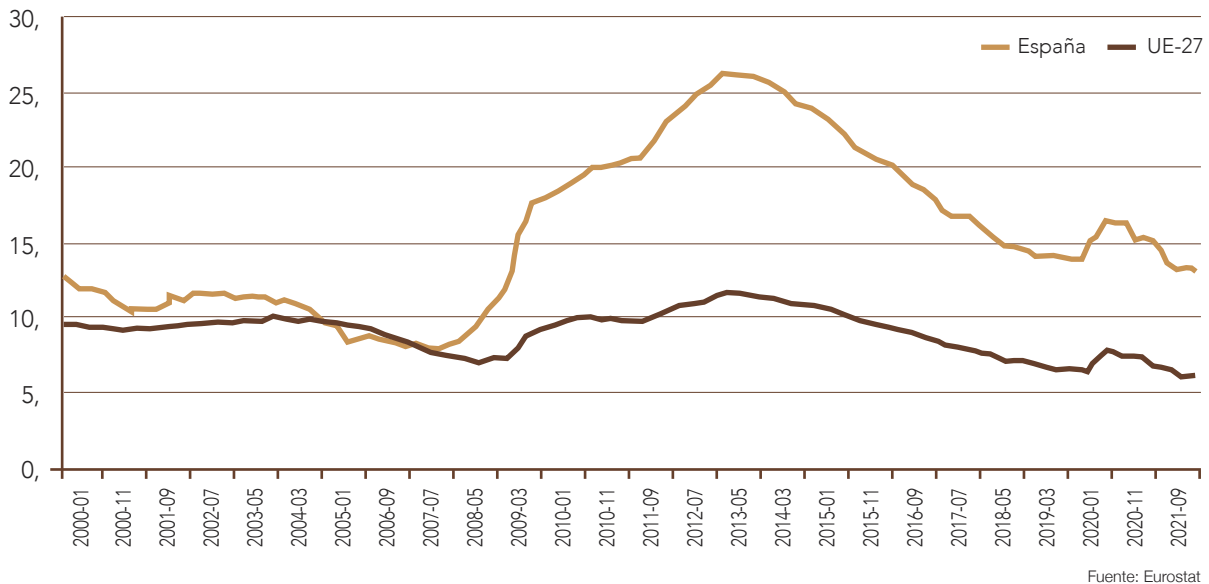
Necesitamos de forma urgente un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo que sea creíble. Retrasarlo bajo el argumento de que la Unión Europea no nos lo exige formalmente es un comportamiento político casi adolescente

rísticas las reacciones violentas a los ciclos económicos, como consecuencia de la persistente dualidad entre los trabajadores cualificados y el gran “ejército industrial de reserva” de trabajadores poco cualificados que se acumula en el mercado laboral. Basta decir que dos tercios de los desempleados españoles cuentan como máximo –insisto, como máximo– con la ESO como nivel de cualificación. Pero quizás el principal problema de España es que este lleva siendo el mismo diagnóstico desde comienzos del siglo XX. Una vez superado el problema de cantidades tras la creación de cinco millones de puestos de trabajo entre 1996 y 2004, llevamos dos décadas aplicando políticas que, a la luz de los resultados, o son insuficientes o no son las adecuadas. La reciente reforma laboral del Gobierno es seguramente el mejor botón de muestra. En esta reforma se ha consagrado la idea de que la temporalidad en España es un problema estadístico y no real. El Gobierno ha sucumbido a la tentación de reducir la temporalidad cambiando el nombre del contrato temporal, renunciando así a afrontar el verdadero problema que no es otro que un modelo productivo que, por razones de oferta y de demanda, genera relaciones laborales temporales y de baja calidad. Tengamos en cuenta que de los más de 20 millones de contratos que se firman en España anualmente, más del 60% se concentran en la hostelería y en el comercio minorista. Necesitamos, pues, algo más que voluntarismo político para superar esta lacra social que lastra las expectativas.

Necesitamos que palabras como empleabilidad, reindustrialización o movilidad adquieran sentido más allá de los mítines electorales cada cuatro años y que se adquieran compromisos políticos cuantificados que se puedan medir y evaluar. Y necesitamos adaptar la formación de los futuros trabajadores a las nuevas necesidades

GRÁFICO 5.

Evolución de la tasa de paro en la UE y en España (%)
(2000-2022)



del mercado laboral y a aquellas actividades intensivas en nuevas tecnologías que ya hoy registran un elevado nivel de vacantes.

El segundo de los aspectos fundamentales para provocar un cambio de las expectativas económicas es la gestión de la sostenibilidad del modelo de bienestar. Los españoles nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades, a gastar mucho más de lo que somos capaces de generar y a incumplir sistemáticamente nuestros compromisos de estabilidad presupuestaria. La expansión monetaria y las compras ilimitadas de deuda por parte del Banco Central Europeo desde la crisis de 2008 han generado una suerte de ilusión fiscal, un espejismo sobre la sostenibilidad de nuestro endeudamiento que, sin embargo, nos hace muy vulnerables a los cambios súbitos del ciclo como el que vivimos en la actualidad y, sobre todo, lastra nuestras posibilidades de acometer

reformas a largo plazo. La apología permanente del déficit público parece haber calado entre la sociedad española. La austeridad, que antaño era una virtud, ahora se considera un mal a erradicar. Se ha perdido la noción de la política como el arte de establecer prioridades y se ha convertido el presupuesto en una máquina incremental de consagrar derechos. A pesar de las reiteradas alertas desde organismos independientes, la eficiencia del gasto público sigue sin entrar en la agenda política y se hace recaer sobre los ingresos públicos cualquier proyecto de ajuste fiscal, lo que desincentiva a las personas a aumentar su actividad y ahuyenta a las empresas y a su capacidad de inversión y creación de riqueza y empleo. Necesitamos de forma urgente un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo que sea creíble. Retrasarlo bajo el argumento de que la Unión Europea no nos lo exige formalmente es un comportamiento político casi adolescente que abunda en

la percepción crecientemente generalizada de que, por suerte o por desgracia, nos hemos convertido en un protectorado de nuestros socios ricos europeos y que es en Bruselas donde se marcan los designios del futuro de España.

El tercer elemento esencial para generar buenas expectativas de futuro tiene que ver con la fiabilidad de España como país receptor de inversiones. Este factor, que ha sido importante siempre, lo es ahora aún más puesto que nos encontramos inmersos en dos grandes revoluciones, la medioambiental y la digital, muy intensivas en capital y cuya gestión determinará el papel a jugar por nuestro país en las décadas venideras. En este ámbito tampoco vamos bien. El deterioro del atractivo inversor en España se está exacerbando en los últimos años con un Gobierno que abierta y explícitamente maltrata a las empresas. La permanente alusión al beneficio empresarial como el causante de los males de la economía y a su reducción como la vía para solucionarlos, forma parte de los discursos po-

España necesita un anclaje estratégico y la suficiente persuasión política para convencer a los españoles de que es crítico reordenar nuestras prioridades como sociedad. Parece evidente que este Gobierno no es el adecuado para acometer esta tarea

pulistas más rancios y fracasados del planeta. En el mundo actual, dejar de ser un destino fiable para la inversión es seguramente el peor de los errores que, como sociedad, podemos cometer. Casos recientes como la grotesca toma de control político en INDRA, haciendo saltar por los aires todos los preceptos del buen gobierno corporativo, son ilustrativos del escaso respeto por parte del Gobierno a los determinantes esenciales de la seguridad jurídica. Pero no es el único ejemplo ni el más grave. España es el país del mundo con más arbitrajes internacionales por incumplimiento de condiciones a inversores y los fondos internacionales que invierten en nuestras empresas se cuestionan de forma creciente los constantes cambios regulatorios en sectores clave de la economía como el eléctrico. Los cambios recientes en el Instituto Nacional de Estadística y los ataques permanentes y personales al gobernador del Banco de España son otra forma de cuestionar la fiabilidad de instituciones independientes que minan nuestra credibilidad como país serio y fiable.

En definitiva, España no va bien. No va bien porque las circunstancias coyunturales son malas y eso nadie lo puede negar. Pero no va bien porque hace mucho tiempo que, escudándose en la mala coyuntura, no se hace lo necesario para alterar la percepción tanto interna como externa de que el futuro no será mejor. España necesita un anclaje estratégico y la suficiente persuasión política para convencer a los españoles de que es crítico que reordenemos nuestras prioridades como sociedad. Parece evidente que este Gobierno no es el adecuado para acometer esta tarea. Cuanto antes nos demos cuenta de esto, mayores serán nuestras posibilidades de revertir la situación y recuperar el enorme potencial que sigue atesorando este país. ■

PALABRAS CLAVE

- España ● Economía ● Descapitalización ● Convergencia
- Productividad ● Mercado laboral ● Temporalidad
- Estabilidad presupuestaria ● Consolidación fiscal
- Inversiones ● PIB ● Pandemia ● Recesión ● Gobierno